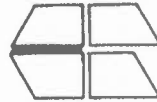


DEBATES

Estas son las intervenciones en la mesa redonda, «La conflictividad reciente en Costa Rica», organizada por la Revista ABRA, en diciembre de 1995, a propósito de la Huelga Magisterial de julio-agosto de 1995.



LA HUELGA MAGISTERIAL DE JULIO-AGOSTO DE 1995: LOS TRABAJADORES EN LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN Y EL HAMBRE

Rogelio Cedeño Castro



La huelga magisterial de julio y agosto de 1995, con una duración de cinco semanas, no puede ser percibida simplemente como una más de las que, con alguna frecuencia, le venimos realizando al magisterio costarricense. Desde hace poco más de una década (1), pues, está surgiendo un movimiento de los trabajadores y para los educadores de la realidad social contemporánea, además de que se está cayendo así en la más grande de las simplificaciones acerca de un evento que, por sus alcances y su naturaleza esencialmente diferente, marca un hito en la historia social del país. Ya que permite ubicar la finalización de un prolongado período de tregua en la lucha social que se había extendido, por más de medio siglo, a partir de la época en que se dictó el Código de Trabajo y se produjo la reforma social de los años cuarenta e inicia, en consecuencia, el inicio de un nuevo período de conflictos sociales que, al contrario de lo que parecería por los comentarios ligados con los intereses de los sectores dominantes, aparece ha mostrado algunas de las características que habrá de tener, en los próximos años, en nuestra lucha a muy diversas y múltiples manifestaciones.



«Si la clase dominante ha hecho concesiones sólo frente al poder de que disponían las masas, el debilitamiento de este debido a la mengua del espíritu de lucha durante la tregua puede hacer que aquella retome sus antiguas pautas de conducta. De este modo, parecería que la cooperación de la tregua sólo puede prolongarse si se mantiene en alguna medida el equilibrio de poder del que depende fundamentalmente». JOHN REX. **Problemas Fundamentales de la Teoría Sociológica.**

«Sólo gracias a aquellos sin esperanza nos es dada la esperanza». WALTER BENJAMIN (1892-1940) citado por Herbert Marcuse al concluir su obra **El Hombre Unidimensional.**

La huelga que realizaron los trabajadores de la educación de Costa Rica, durante los meses de julio y agosto de 1995, con una duración de cinco semanas, no puede ser percibida simplemente como una más de las que, con alguna frecuencia, ha venido realizando el magisterio costarricense, desde hace poco más de una década (1), pues esto sería reducir enormemente las posibilidades que su interpretación ofrece, en términos de sus enseñanzas para el movimiento de los trabajadores y para los estudiosos de la realidad social contemporánea, además de que se estaría cayendo así, en la más grosera de las simplificaciones acerca de un evento que, por sus alcances y su naturaleza esencialmente diferente, marca un hito en la historia social del país, ya que permite ubicar la finalización de un prolongado período de tregua en la lucha social que se había extendido, por más de medio siglo, a partir de la época en que se dictó el Código de Trabajo y se produjo la reforma social de los años cuarenta e indica, en consecuencia, el inicio de un nuevo período de conflictos sociales que, al contrario de lo que parecen pensar muchos comentaristas ligados con los intereses de los sectores dominantes, apenas ha mostrado algunas de las características que habrá de tener, en los próximos años, en que dará lugar a muy diversas y puntuales manifestaciones.

Se trata, ni más ni menos, que de la rebelión de grandes sectores de la población contra las políticas de ajuste estructural impuestas, en casi todo el planeta por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero sobre todo de un rechazo, en esencia, a las consecuencias más visibles de la llamada globalización o mundialización impulsada por los ideólogos del mal llamado «neoliberalismo», al cual sin lugar a dudas, podría calificársele mejor como un LIBERALISMO SIN LIBERALISMO. Es decir, como la expresión de una paradoja de carácter ideológico que indicaría la ausencia de relación entre la etiqueta y lo que resulta ser en efecto el producto empaquetado, pues esta nueva versión ideológica de las viejas propuestas de los monetaristas, así como de las aún más arcaicas resonancias del darwinismo social de la BELLE EPOQUE (2) y del pensamiento económico y social dieciochesco, que conforman el evangelio de los hoy fervorosos creyentes en el papel hegemónico del mercado como el gran mecanismo natural encargado de organizar la vida social, puede además ser caracterizada en términos de un exacerbado autoritarismo cuyas manifestaciones concretas lindan con las del fenómeno del totalitarismo que ha dominado buena parte de la vida política, social, económica y cultural del siglo que está a punto de finalizar (3).

Los acontecimientos, de julio y agosto de 1995, se caracterizaron por la participación de un gran sector del pueblo costarricense, en apoyo de un conflicto huelguístico que, desde el principio, tuvo dos características, a partir de las cuales resulta posible diferenciarlo de otros eventos de esta naturaleza: en primer lugar, no se trató solamente de una lucha por las reivindicaciones específicas de los trabajadores de la educación, principales protagonistas del conflicto, sino de la defensa de una plataforma nacional de lucha, la cual implicaba un rechazo al ajuste estructural y a las políticas de miseria que este trae aparejadas y, en segundo término, se trató de un conflicto conducido, en los hechos, por las bases magisteriales, que sobrepasó e incluso aterrorizó a una burocracia sindical comprometida, de previo, con las políticas sociales y económicas de los sectores dominantes.

Es importante destacar que el escenario previo al estallido del conflicto, estaba ya caracterizado por la presencia de un movimiento sindical cuya dirigencia había sido cooptada, desde hacía mucho tiempo, por quienes detentan efectivamente el poder en Costa Rica a través de muy diversas formas de clientelismo y el establecimiento de lealtades partidarias, dentro de una precaria partidocracia que suponía (al menos en teoría) la existencia de partidos pluriclasistas

que, en la práctica, solo representan los intereses del sector empresarial más fuerte del país o incluso los de algunas empresas transnacionales. Es decir que, a partir de la consideración cuidadosa de tales antecedentes, resultaba posible establecer las raíces de la conducta de muchos de los dirigentes que aparecían al frente de las organizaciones magisteriales, al dar inicio la huelga, en especial a partir del hecho de que dos de ellos habían establecido, previamente, lealtades partidarias de ese orden, las cuales explicarían en gran medida su comportamiento en la fase final de la huelga (4).

El llamamiento a las bases, para realizar la huelga, no estuvo exento de la presencia de elementos de carácter utópico, tendientes a recuperar, al menos en el discurso, tradiciones correspondientes a la etapa fundacional del movimiento de los trabajadores, ubicada allá en los últimos años del siglo anterior y en las primeras décadas del presente. De esta forma, los mismos dirigentes comprometidos de hecho con los sectores dominantes ensayaban un discurso contestatario que implicaba, si nos atenemos a su formulación, un auténtico llamamiento a la desobediencia civil dentro de los más clásicos principios libertarios (5).

Se trataba de una de esas situaciones, que pueden definirse como clásicas, en las cuales una burocracia sindical se ve obligada a lanzarse a una lucha en la que, desde luego, no quiere comprometer sus mejores armas, puesto que ha desarrollado intereses ajenos a los de las bases que dice representar (6). Lo anterior, es claro, en sumo grado, si nos atenemos a algunos hechos previos, según los cuales nos encontramos con que fue una huelga de hambre realizada, días antes, por algunos educadores, de quienes la historia hablará, la que comprometió, a esta dirigencia, a conducir una huelga con estos alcances; la cual fue concebida, inicialmente, en defensa del régimen de pensiones del magisterio nacional, herido de muerte por una nueva ley aprobada, en esos primeros días de julio de 1995, por la legislatura y que fue lo que vino a precipitar el estallido de este conflicto, a pesar de las intenciones de muchos de los integrantes de la dirigencia magisterial y de su tendencia a percibirlo, en todo caso, en los términos de una huelga más, de las que ya estaban acostumbrados a organizar y a concluir, dentro de la modalidad que han venido asumiendo sus, cada vez más estrechas, relaciones con la clase política.

La naturaleza radical del discurso de los dirigentes magisteriales, aparecía así, como inversamente proporcional al oportunismo e incosecuencia de sus tácticas y estrategias, durante todo el desarrollo de la huelga. No otra cosa puede inferirse del contraste entre el llamado a la desobediencia civil, lanzado para dar

inicio a la huelga y la timorata, lo mismo que, por momentos, irresponsable conducción de un conflicto huelguístico que, por los términos en que se desarrollaba, jamás podía conducir a logros efectivos a sus heroicos protagonistas: los miles de maestros y maestras de todos los tramos del sistema educativo que sostuvieron la lucha con innumerables sacrificios.

Se estaba, por otra parte, ante un combate desigual que sólo podía ser ganado empleando a fondo y de la manera más inteligente, disciplinada y precisa los escasos recursos con los cuales se contaba. En los hechos era sumamente difícil la concreción de una voluntad, lo suficientemente clara, en los dirigentes del Comité Cívico Nacional que se integró con el propósito de darle una conducción nacional a la huelga, lo que debe señalarse como uno de los logros de la huelga en sí misma, a pesar del desenlace posterior de los acontecimientos, lo mismo cabe señalar para el caso del Frente de Organizaciones Magisteriales (FOMA), cuya cúpula apareció bastante errática en sus acciones, traducidas en su incapacidad para responder, de manera adecuada, a situaciones, en muchos casos inéditas, al menos en el medio costarricense.

La vertiginosidad de los acontecimientos políticos y sociales, enmarcada en el pacto Figueres-Calderón, del mes de mayo de 1995 (7), que venía a simbolizar la más estrecha alianza entre todas las fuerzas económicas, políticas y sociales con poder real, constituidas en expresión de los intereses de la joven clase política costarricense que ha tomado por asalto, en los últimos años, los poderes



públicos, demandaba no sólo una gran imaginación sino también una gran capacidad de adaptación (en el buen sentido del término) a las nuevas circunstancias. La agenda de los dos partidos políticos dominantes (no sólo en términos electorales), las cámaras patronales y la casi totalidad de los medios de comunicación masiva consistía en transformar el país mediante una agenda legislativa que no debía ser discutida, en modo alguno, por los parlamentarios (¿parlamentarios?) de los dos partidos tradicionales (que cuentan con 54 de los 57 diputados que conforman la Asamblea Legislativa de Costa Rica), agenda conformada por: nueva ley de inquilinato, ley de control de armas, nueva ley de pensiones del magisterio nacional, desmantelamiento de la banca estatal, reforma constitucional para establecer las llamadas «garantías económicas» y otras que facilitarán la privatización de las más importantes empresas nacionales que, hasta ahora, el Estado ha considerado como estratégicas.

Los pretextos para imponer al poder legislativo (ya sin poder y sin capacidad deliberativa alguna) una agenda con esas características (8), están basados únicamente en la razón de estado de una clase dominante que ha decidido, de previo, pasar a jugar las reglas del juego de una supuesta competitividad internacional. Es decir, la clase política costarricense decidió bajar el precio de los factores de producción, especialmente el de la mano de obra que es el más importante, dentro de un esquema de flexibilización y desregulación del mundo de las relaciones laborales, lo que al lado de una apertura comercial, que irá reduciendo los aranceles al mínimo y de la venta de las principales y más rentables empresas estatales, marca un hito dentro de lo que considera como sus prioridades para navegar en el peligroso mar de la mundialización.

En un inusitado estilo para una sociedad que se mira a sí misma como un modelo democrático dentro del contexto latinoamericano, los sectores dominantes emprenden, a través del control y del uso indiscriminado de los medios de comunicación masivos, una campaña de honda raigambre totalitaria, digna de los mejores émulos de Joseph Goebbels y su aparato de propaganda nazi y con la gran ventaja sobre aquel, del uso masivo que hacen de la televisión, cuya enorme importancia no pudo comprender y aprovechar el ministro de propaganda del III Reich, a pesar del gran desarrollo que tuvo en Alemania, desde mediados de los años treinta.

Invocando viejos símbolos patrios, los sectores dominantes se lanzan en una impresionante campaña contra la huelga que se gestaba, primero, a través del uso masivo de la televisión y la radio, en donde la figura del Ministro de

Educación, un conocido tecnócrata, aparece diciendo que no hay ningún motivo para una acción de tal naturaleza y que, en materia de pensiones, el estado había ofrecido lo mejor que podía a los trabajadores de la educación, a pesar de que los testarudos hechos se encargarían de decir lo contrario: los legisladores aprobaron, sin análisis alguno, una nueva ley de pensiones que reduce al mínimo la cotización del estado en cuanto tal y en su condición de patrono, al mismo tiempo que obliga a la mayoría de los educadores a pagar cotizaciones cada vez más altas, a tener que laborar hasta una edad más avanzada y a recibir menos del 50% del último salario devengado, en el momento de su retiro.

El intenso bombardeo propagandístico, realizado en los días inmediatamente anteriores al estallido de la huelga, buscaba producir un efecto intimidatorio y al mismo tiempo, pretendía minimizar las causas que conducían a un conflicto, cuya profundidad apenas empezaba a percibirse. Sin embargo, por los resultados que arrojó, podrían haber dado lugar a un efecto bumerán, volviéndose en contra de lo que pretendían los autores de tal campaña, especialmente la Ministra de Información, Florisabel Rodríguez y el propio Ministro de Educación. La huelga estallaría con mayor fuerza aun, el día 17 de julio de 1995, a pesar de las amenazas y los cantos de sirena de muchos funcionarios, así como de las de algunos editorialistas de los medios de comunicación masivos, lanzados en una verdadera cruzada contra los derechos y las conquistas de los trabajadores de la educación.

La necesidad de combatir los supuestos privilegios que disfrutaban, hasta entonces, los trabajadores de la educación fue otra de las argumentaciones usadas en contra de la huelga, olvidándose por supuesto los autores de la publicidad gubernamental de hablar de los exorbitantes privilegios que disfrutaban la clase política y los sectores empresariales: exoneraciones, proteccionismo, regalías, abusos de poder, condonación de deudas millonarias, legislación en beneficio propio y una mano de obra barata y abundante. Esos sí son verdaderos privilegios, en estricto sentido, por lo que constituye una auténtica ironía y un atropello, decir que un determinado grupo de trabajadores es privilegiado, cuando de lo que se trata es de reducir a la miseria a toda la clase trabajadora, volviendo a las condiciones sociales de fines del siglo XIX o de principios del presente, cuando el movimiento obrero aún no les había arrancado algunas de sus más importantes conquistas.

En esta oportunidad, como nunca, se puso de manifiesto el vivo contraste entre las argumentaciones en contra de la huelga utilizadas por los sectores

dominantes y la cada vez más dramática realidad de los jóvenes en este tipo de sociedades. Se reiteró hasta la saciedad que la huelga, al significar la interrupción del curso lectivo, perjudicaba seriamente a los jóvenes, lo que, sin duda, impactó a muchos padres de familia, olvidando que las políticas del capitalismo salvaje los conducen a un callejón sin salida, en el cual su único destino parece ser el desempleo, el desencanto y sobre todo, arribar a la condición de fuerza laboral excedente, destinada a abaratarle el costo de la fuerza laboral a las empresas transnacionales y a otras que aún no lo son.

Sin duda, la gran arma que los educadores tienen en esta lucha (la clase política lo sabe muy bien y le teme), consiste en comenzar a hablarle a los jóvenes acerca del país real y no de la realidad virtual que a diario se nos presenta; al menos así, estos tendrán claro que están apenas en el comienzo de un largo camino de luchas, que habrán de emprender si esperan contar todavía con algún futuro en una sociedad cuya única moral es la que se basa en el egoísmo y la exclusión social. Un mayor apoyo de los jóvenes a la huelga hubiera, en consecuencia, resultado no sólo decisivo sino que hubiera significado una defensa consecuente de sus propios intereses.

Desde el inicio, flotaba en la conciencia colectiva de los trabajadores de la educación la idea de que lo que estaba en juego no era solamente su sistema de pensiones, sino la esencia misma de un régimen y unas reglas del juego considerados hasta entonces como democráticas, que estaban dejando de serlo; por lo que, de esta manera, un rótulo colocado en la puerta principal del Liceo de la ciudad de Heredia, al lado de un crespón negro, parafraseando a Nietzsche, decía «LA FE MURIO» y venía a expresar, de manera inequívoca, esos estados de la conciencia colectiva. Es decir, que la credibilidad hacia los sectores dominantes que los dominados habían mantenido, por más de medio siglo, había muerto y en cuanto a la frase del conocido filósofo alemán, hacía mucho tiempo era evidente que el despiadado mundo burgués se había encargado de matar a Dios, aunque sin conseguirlo del todo, como lo demuestra la incesante lucha de los oprimidos en todos los confines del planeta.

A partir del primer día, la movilización constante va a ser una característica esencial del movimiento huelguístico. La presencia de miles de educadores en las calles de las principales ciudades y poblaciones del país indicaba la resolución de luchar contra el hambre, la exclusión y el autoritarismo exacerbado de los sectores dominantes, a pesar del cerco ideológico que se le tendía al movimiento y de los grandes problemas de conducción que se presentaron desde el principio.

La dirigencia, por su parte, enclaustrada en las concepciones rutinarias y en las maneras de hacer, características de una burocracia sindical conservadora, pretendía, en el discurso, lograr la unidad de los trabajadores y convertir el movimiento en una gran huelga general, de resonancia nacional. Sin embargo, en modo alguno se crearon las condiciones para asegurar la resistencia, sobre todo si el movimiento se prolongaba como, en efecto, sucedió.

En todo momento fueron las bases y algunas dirigencias regionales quienes tomaron la iniciativa de ejecutar acciones concretas y más adelante, de recoger dinero que permitiera compensar, al menos en parte, los rebajos de salario que comenzaban a sufrir los educadores en huelga, con el paso de los días. Era claro que los dirigentes, en ningún momento, habían pensado en ese factor esencial que vendría a indicar muy rápidamente una de las debilidades de la huelga, pues venía a constituir una de las zonas de incertidumbre de los trabajadores que el gobierno podía manejar mejor. El radicalismo en el lenguaje de algunos dirigentes contrastó, como se señaló antes, con su inconsecuencia e incapacidad para enfrentar una situación nueva en la cual los trabajadores de la educación vieron caer, por primera vez, sobre sus espaldas, el peso de la represión.

Se jugaba así, todos los días, a la fabricación de esperanzas y se cifraban grandes expectativas en que la siguiente manifestación sería la más grande y la que marcaría un hito, a partir del cual las autoridades gubernamentales se verían obligadas a negociar realmente y a detener la aceleración en el ritmo de las políticas de ajuste estructural, las cuales habían pasado rápidamente del gradualismo al «shock». Fue así como se realizaron grandes manifestaciones, a las que se unieron miles de trabajadores de todos los sectores, además de que estas contaron, asimismo, con un gran apoyo popular reflejado en los resultados de las diversas encuestas que se realizaron en esos días.

La caída en la popularidad del gobierno y de la clase política en general contrastaba con la agresiva campaña que realizaban ya no sólo el gobierno sino las cámaras patronales y los medios de comunicación. Las cadenas de la dominación ideológica parecían romperse por momentos y al parecer, entre más dura y agresiva era la campaña, los educadores y otros sectores de población comenzaban a contrastar la falta de correspondencia entre la realidad que estaban viviendo y percibiendo y la que estaban presentando las radioemisoras y las televisoras. La sensación de que algo se había roto en lo más profundo de la conciencia colectiva era ya algo más que una intuición, constituyéndose en un

indicador más de la profunda crisis que empezaba a abrirse paso en una sociedad como la costarricense, caracterizada desde hace mucho tiempo por el hábil manejo ideológico de los conflictos que realizan los sectores dominantes.

Las manifestaciones del 26 de julio y del 7 de agosto marcaron, en todo caso, los puntos más altos de la movilización popular, caracterizándose la segunda de ellas por ser una de las más multitudinarias en varias décadas, pues la cifra de personas en las calles de la ciudad capital protestando contra las políticas del ajuste estructural sobrepasó con creces los cien mil manifestantes. Esto, sin embargo, no fue capitalizado por la dirigencia, que se vio enfrentada al potencial represivo de las fuerzas de seguridad del estado, puesta en evidencia con la ruda represión física en contra de los manifestantes que se encontraban al frente de la Casa Presidencial en San José y por la falta de objetivos claros a ser alcanzados, a partir de tales eventos.

La ocupación simbólica, posterior, de las instalaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte de un importante grupo de educadores y las denuncias sobre la represión hechas ante la prensa internacional le dieron gran resonancia al conflicto, el cual se desarrolló paralelamente a una huelga general de los trabajadores panameños, en defensa de su código de trabajo sometido también a la flexibilización por la oligarquía panameña, en esta oportunidad encabezada por el «torrijista» (?) Ernesto Pérez Balladares (9).

El autoritarismo y la falta de escrúpulos, de quienes integran la clase política, se pusieron de manifiesto, en todo momento, con sus duras expresiones, indicando que a los gobernados no les quedaba otra salida que obedecer a la voluntad omnímoda de los gobernantes a pesar de la más que evidente injusticia de las políticas seguidas. Las cámaras patronales y la llamada Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE) no lo fueron menos. Lo anterior, unido al gran respaldo que las acciones de huelga tuvieron en amplios sectores populares, le otorga a esta las características de la primera gran rebelión del pueblo costarricense contra lo que avizora como las consecuencias más nefastas de la llamada mundialización, en un país que, en muchos sentidos, ya no volverá a ser el mismo como consecuencia de las acciones de los dominadores, unidos como nunca en un bloque monolítico.

El desenlace de esta etapa del conflicto y la imposibilidad de una negociación real con el gobierno y los sectores dominantes, estuvo enmarcado en un problema de conducción de la huelga, por un lado, y por el otro, por la naturaleza contradictoria de los intereses de la burocracia sindical que, con la ayuda de los

rectores de la universidades estatales y particularmente, el de la Universidad Nacional (UNA), M.Sc. Jorge Mora, elaboró una agenda de negociación a ser discutida una vez levantada la huelga, la cual se constituyó en una burla, al no dar fruto alguno, en materia de reivindicaciones sobre el régimen de pensiones y otros derechos de los trabajadores, por lo que las causas que dieron origen a la huelga continúan siendo válidas, lo que obligará a las bases magisteriales a demandar, a las dirigencias, más temprano que tarde, una rendición de cuentas y el señalamiento de nuevas acciones de lucha.

Sin duda, era imposible pensar en el éxito de un conflicto huelguístico, encabezado por una dirigencia obligada, previamente, por las bases a tomar un camino, de cuyos alcances nunca estuvo convencida y cuya profundización no hizo sino desatar sus temores, ya que casi todo el tiempo estuvo desbordada por la gran iniciativa de aquellas, que percibieron la huelga como suya y le imprimieron características inéditas, dentro de la historia reciente de las luchas reivindicativas del magisterio costarricense.

El gobierno, mediante hábiles negociaciones sectoriales, aprovechó la debilidad y la inconsecuencia de los líderes de algunos sectores sindicales ubicados en áreas estratégicas, como los portuarios de Limón, en la costa del Caribe y los de la electricidad y telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empresa que, por lo demás, aparece en la mira de los partidarios de las políticas de «shock» para ser privatizada en los próximos años, para dividir y crear falsas expectativas que llevarían finalmente a fracasar el conflicto huelguístico, al menos en esta fase (10).

¿La imposibilidad de convertir la huelga magisterial de julio-agosto de 1995 en una huelga general de al menos todo el sector público, puede ser considerada como un fracaso? Creemos que no, pues, por una parte, los educadores midieron su fuerza y se pudieron detectar una serie de debilidades, entre ellas las que plantea el excesivo gremialismo existente en determinados sectores del magisterio, lo que permitió a algunos sindicatos justificar la falta de solidaridad efectiva con la huelga, a partir del hecho de que los trabajadores de la educación no habrían respaldado, en anteriores conflictos, las luchas de otros trabajadores. Sin duda, tales debilidades e inconsecuencias atribuibles, sin duda, a algunos sectores de la dirigencia magisterial tendrán que ser corregidas en otras etapas de la larga lucha que habrá de librarse, en los próximos años, contra las políticas de los entusiastas del capitalismo salvaje.

El surgimiento de una nueva organización, en el seno de los trabajadores de la educación (11), es otro de los resultados de una huelga cuyo desenlace aún

no ha sido escrito y constituye una legítima inquietud de los educadores ante las grandes deficiencias de la conducción sindical y la necesidad de estar a la altura de los desafíos de un nuevo período de conflicto social, en la escena nacional e internacional. Esto último, teniendo en cuenta que estamos ante fenómenos de naturaleza planetaria, que sólo pueden ser comprendidos y respondidos en esa escala.

Cabe, además, señalar que los sectores populares comprendieron la necesidad de luchar por un porvenir para ellos y para sus descendientes, devolviéndole un lugar a la esperanza en un escenario donde las fuerzas y los procesos sociales se presentan como entes abrumadores y aplastantes hacia las expectativas de los seres humanos concretos. Se le dijo no a la imposición de sacrificios, sin sentido alguno, a las clases trabajadoras, sobre todo teniendo en cuenta que grandes sectores del

pueblo costarricense y latinoamericano saben ya que no obtendrán compensación alguna por ellos, a pesar de todo lo que continúan diciendo LES ENFANTS TERRIBLES de una clase política, a la cual resulta ya difícil identificar como nacional.

Los sucesos del 15 de setiembre, después de la huelga, en celebración de la fecha de la independencia nacional, caracterizados por la protesta estudiantil y un cambio en el sentido mismo de la celebración, vinieron a ser el primer eslabón de una cadena de exteriorizaciones del conflicto social, a partir de las distintas percepciones de las estructuras simbólicas hasta ahora compartidas por el conjunto de la sociedad y a las cuales los actores sociales en conflicto, les otorgan ahora sentidos diferentes.



Notas aclaratorias

- (1) Las características de esta huelga la hicieron esencialmente distinta de cualquiera de las realizadas durante los años 80 y comienzos de la presente década, tanto por su duración como por la decisiva participación de las bases magisteriales.
- (2) Nombre aplicado al período histórico, correspondiente a la etapa anterior a la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la cual marca el apogeo de los imperialismos europeos y los delirios de grandeza de las clases dominantes, a escala planetaria, solo comparables a los de nuestros días.
- (3) Ver, Rodrigo Quesada Monge. **El siglo de los totalitarismos**. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 1993, para retomar esta discusión desde un marco de referencia más amplio.
- (4) Estos dos dirigentes aparecen encabezando ahora, al lado de otros oportunistas de larga tradición, un supuesto partido político de los trabajadores, que lo que busca es abortar el surgimiento de verdaderas organizaciones políticas de la clase trabajadora, en reemplazo de la vieja izquierda de raigambre estalinista, hoy sumida en una profunda crisis, al no poder ofrecer respuestas a la caída del Muro de Berlín y de los regímenes «comunistas» del Este europeo. Es indudable que tales dirigentes buscan: primero, el provecho personal para, después, devolver a los trabajadores de la educación al redil de los sectores dominantes.
- (5) En el llamamiento a la huelga se hablaba de romper con los partidos políticos, dominantes o tradicionales; de no realizar esfuerzos económicos extraordinarios para apuntalar las ya debilitadas instituciones educativas; de no realizar el censo nacional, en el que los educadores siempre han jugado el papel de encuestadores muy baratos y se hablaba, no sin una fuerte dosis de oportunismo, de la creación de un nuevo partido político de los trabajadores, cuya dirigencia estaría constituida por algunos de los «iluminados» que hicieron fracasar la huelga, en esta fase del conflicto que se encuentra planteado.
- (6) Los trabajos de Max Weber y Robert Michels sobre el fenómeno de la burocracia son bastante conocidos, siendo notable el análisis que sobre la burocracia sindical realizó este último, en su conocida obra **Los partidos políticos**.
- (7) El pacto Figueres-Calderón marcó la alianza estratégica de los intereses de la joven clase política costarricense, caracterizada por la total ausencia de principios, con los de algunos grupos empresariales y los de la usura internacional para imponer, a los hoy debilitados sectores populares, la política del hambre y la exclusión. Sin embargo, pese a lo anterior, marca también el inicio de la ruptura de muchos sectores populares, entre ellos la dirigencia magisterial de base que, hasta el momento, había sido correa de transmisión de ciertas políticas, con el bipartidismo dominante, ahora desenmascarado por representar solo los intereses de quienes tomaron por asalto el aparato estatal, en los últimos años.
- (8) Ver artículo «Claves para entender la huelga: LA BATALLA DEL ULTIMO REDUCTO DE RESISTENCIA SINDICAL EN COSTA RICA», Catarina Goldoni y Rogelio Cedeño, periódico **Esta semana**, edición N° 332 del 4 al 10 de agosto de 1995.
- (9) El conflicto laboral panameño no ha sido objeto de análisis, por parte de la dirigencia sindical en Costa Rica, a pesar del paralelismo y la gran resonancia internacional que tuvo, al lado del que protagonizaban los trabajadores de la educación costarricense. La cruenta represión, manifestada en la pérdida de vidas, caracterizó a la rebelión de los trabajadores

de Panamá contra la mundialización y contra la inconsecuencia de los «torrijistas» del llamado Partido Revolucionario Democrático, que acabaron con las conquistas obreras expresadas en el Código de Trabajo, promulgado por Omar Torrijos en 1972.

- (10) Este movimiento no puede ser comprendido desde una visión puramente coyuntural, pues se trata, más bien, de un conflicto de largo alcance que habrá de tener exteriorizaciones recurrentes.
- (11) El Sindicato Patriótico de los Trabajadores de la Educación (SINPAE) 7 de agosto, creado en la ciudad de Heredia, el día 12 de octubre de 1995, que busca responder a los objetivos de lucha planteados y a la necesidad de construir, desde las bases, una cultura organizacional diferente, en procura de romper con los vicios del sindicalismo, correspondiente al prolongado periodo de tregua, que ahora concluye.



LAS LECCIONES DE LA HUELGA DE LOS EDUCADORES

Manuel Sandoval Coto



I. ANTECEDENTES

La huelga del Magisterio Nacional de julio-agosto de 1995 es, sin lugar a dudas, la lucha social más importante en lo que va de esta década, porque estuvo planteada la posibilidad de que se generalizara al conjunto del movimiento de masas y el gobierno se viera obligado a frenar la aplicación de los planes de ajuste estructural y de reforma del Estado. El hecho de que se haya saldado con una derrota de los educadores, va a acelerar, por el contrario, los despidos, las reestructuraciones y la privatización de instituciones públicas. Por su fuerza numérica, su peso social y su tradición de lucha, el Magisterio Nacional era el único sector del movimiento de masas con la posibilidad de canalizar, en una huelga nacional, todo el descontento popular contra Figueres.

La huelga de las universidades en agosto-setiembre de 1991 y del Magisterio en el 92 y el 93 para defender su régimen de pensiones contra la ley marco, habían obligado ya al gobierno de Calderón (1) a retroceder y replantearse el ritmo de la reforma del Estado para no chocar de frente con el movimiento de masas. Pasó así a primer plano la concertación con la burocracia que dirige la mayoría de los sindicatos, para «camuflar» los despidos de trabajadores con la movilidad voluntaria.

En este punto resulta conveniente que abramos un paréntesis breve, para señalar que la debilidad fundamental del movimiento sindical costarricense ha sido el hecho de que, al frente de los sindicatos, se hayan enquistado dirigentes burocráticos, que rapiñan de los fondos de los mismos, y mediatizan las luchas de los trabajadores para obtener prebendas del gobierno de turno y hacer carrera política en el PLN y el PUSC. Esta burocracia sindical ha sido ganada, en los últimos años, por la ofensiva ideológica y política del capitalismo internacional, respaldada en la idea de que el socialismo murió con el derrumbe de los regímenes estalinistas de Europa del Este y de la ex-URSS, y hay que adaptarse

por tanto a la única sociedad posible: la sociedad capitalista. Ante la incorporación de lleno de la burguesía costarricense en la globalización, la burocracia sindical aceptó como inevitables las transformaciones económicas y del Estado inherentes a la misma, y se empezó a plantear ¿cómo beneficiarse del proceso?

Es así como se empieza a negociar desde el gobierno de Calderón su participación en la privatización de instituciones públicas, por la vía de paquetes de acciones para los sindicatos o de la organización de cooperativas de trabajadores, por medio de la ley SAL, para hacerse cargo de servicios.

Parecía que Figueres iba a seguir esta política de concertación, porque durante la campaña electoral criticó el proyecto del PAE III (2) que estaba negociando Calderón, anunciando que se oponía a los 25.000 despidos de empleados públicos que pretendían los organismos financieros internacionales y que buscaría negociar un PAE a la tica. El sector más fuerte de la burocracia sindical: la dirigencia de la Rerum Novarum, que es la central sindical más fuerte, y del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SEC), está ligado precisamente con el PLN.

Sin embargo, pocos días después de las elecciones, Figueres descubrió el gigantesco déficit fiscal de 100.000 millones de colones que le heredaba Calderón y comenzó a insistir en hacer sacrificios y avanzar en la reforma del Estado, dejando de lado el hecho que el presupuesto nacional se viene inflando por la carga de los intereses de la deuda interna, los certificados de abono tributario (CAT) (3) y el saqueo de los recursos del Estado que realizan los empresarios, a través de los préstamos sin garantía y otros mecanismos fraudulentos, el déficit es consecuencia de que en los últimos años el monto que pagan los empresarios en impuestos ha disminuido sustancialmente, por la reducción de estos y la evasión multimillonaria que realizan, haciendo que la recaudación recaiga fundamentalmente sobre los gravámenes al consumo de los



sectores populares. Las pensiones son un derecho adquirido en tanto que parte del salario diferido de los trabajadores, por lo que no se puede aceptar que se diga que inflan el presupuesto nacional y son responsables del déficit. Los actuarios de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional consideran que el gobierno, con los montos que no dio para que se capitalizara este régimen y los intereses que habrían generado, estaría adeudando más de 350.000 millones de colones, por lo que no habría carga al presupuesto nacional.

Pero el nuevo gobierno se olvidó rápidamente de sus promesas de campaña electoral y retomó la continuidad de los planes de despidos, reestructuraciones y privatizaciones de Calderón, no sólo para no enajenarse el apoyo de los organismos financieros internacionales, sino también porque la absorción de empresas nacionales importantes por el capital mexicano y la entrada masiva de mercancías extranjeras, estaba haciendo acuciantes los problemas que plantea la fragilidad de la economía costarricense para encarar la globalización. Para poder competir en el mercado internacional, la burguesía costarricense está obligada a seguir bajando los costos de producción y sobreexplotar cada vez más a los trabajadores. Además, para poder atraer inversión extranjera tiene que controlar el gasto fiscal estrictamente para poder seguir liberando a los empresarios del pago de tributos.

Los sectores más fuertes de la burguesía, dentro del PLN y el PUSC, comenzaron a ver la necesidad de avanzar en una ruptura completa del monopolio estatal de la banca y en la privatización de las instituciones más rentables, con el fin de ubicarse en estos sectores y sobrevivir a la globalización.

Todas estas dificultades hicieron que Figueres optara por atacar sin miramientos el nivel de vida de los sectores populares. Inauguró su gestión, liberalizando los precios y profundizando la política de Calderón de reajustar los salarios por debajo de la inflación. Para reducir drásticamente el déficit fiscal, se orientó de inmediato a acelerar los despidos de empleados públicos, a hacer recortes de gastos sociales y a aumentar la recaudación fiscal mediante el incremento del impuesto de ventas del 10 al 15%.

Por eso no es de extrañar que el ministro Juan Diego Castro asumiera su cargo, baleando a los trabajadores bananeros en huelga en la transnacional inglesa Geest Caribbean. Se ponía en evidencia así, que este gobierno iba a usar mano dura para imponer las medidas de los planes de ajuste. Por eso el autoritarismo, el saltarse la institucionalidad, el reforzamiento del aparato represivo y la represión a las luchas populares, tienden a reforzarse como rasgos

del Ejecutivo. La lógica de la globalización exige arrebatar más y más conquistas al pueblo, lo que demanda una institución presidencial más fuerte dentro del régimen político costarricense.

Este aspecto ha provocado fricciones con el PUSC, pero el trasfondo de las mismas ha sido que al avanzarse hacia la privatización de instituciones y la ruptura de los monopolios del Estado en áreas claves de la economía como la banca, correos y más adelante... teléfonos, electricidad y seguros, se tenían que establecer las reglas del juego dentro de la burguesía costarricense, para que el rapiñaje del patrimonio estatal no beneficiara a un solo sector. El significado profundo del pacto Calderón-Figueres es que coyunturalmente resolvió estas fricciones, para unificar a la burguesía contra los sectores populares.

II. LA RESPUESTA DE LA BUROCRACIA SINDICAL A FIGUERES

La burocracia sindical esperaba que el gobierno de Figueres mantuviera la política de concertación. El problema que se comenzó a dar, fue que al acelerarse los ritmos de la reforma del Estado y volverse más autoritaria la gestión del gobierno, fue reduciéndose el espacio para una negociación que le permitiera a los burócratas engancharse al proceso. Es así como el gobierno aprovechó la crisis del Banco Anglo para desprestigiar la banca estatal y cerrarlo, echando a la calle a 1.700 trabajadores (4).

En febrero, la negociación con el Banco Mundial del préstamo de 100 millones de dólares, que acompañaba al PAE III, aborta y Castillo, presidente del Banco Central, regresa de Washington con las manos vacías, porque los organismos financieros internacionales quieren que se acelere la reforma del Estado. La carta de intenciones que se firma con el FMI en marzo, va a obligar así al gobierno a profundizar la ofensiva contra los sectores populares. Aparte de los despidos y las reestructuraciones, se establece el congelamiento salarial, el aumento del impuesto de ventas del 10 al 15%, un impuesto selectivo de consumo del 15% para los combustibles y el aumento a 60 años del mínimo de edad para pensionarse (lo que implicaba, claramente, la destrucción de los regímenes especiales de pensiones y por ende el del Magisterio).

La burocracia sindical siente que está siendo marginada por el gobierno, y ante la presión de los trabajadores, el Consejo Permanente de los Trabajadores convoca a un paro el 15 de febrero. El CPT es un organismo de las cúpulas burocráticas de las centrales y los principales sindicatos, que tomaba vida

episódicamente cuando tenían interés en impulsar alguna acción. El paro del 15 de febrero (aunque el Magisterio está en vacaciones) tiene bastante seguimiento en las instituciones donde se para, pero no es seguido de ninguna otra acción, porque la burocracia tiene interés en dar un compás de espera para negociar con el gobierno.

No es sino hasta abril, cuando se ha venido implementando a fondo la movilidad voluntaria y se producen muchos despidos graneados, que nuevamente se plantea un paro nacional. La dinámica apunta a que prenda una lucha de conjunto, al incorporarse ahora los educadores, pero lo que ocurrió ustedes lo saben bien. El gobierno se reunió con el CIMA (ANDE, APSE y SEC) (5) y los sindicatos universitarios, y los sacó del paro con la promesa de negociar en treinta días el proyecto de una nueva Ley de Pensiones del Magisterio Nacional que recorría las distintas instancias de la Asamblea Legislativa.

Poco después, la Rerum Novarum pacta concertar los despidos. La Federación de Trabajadores de Limón (FETRAL) no se incorpora al paro. A SITRAPEQUIA, el Sindicato de los Trabajadores de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), se le conceden una serie de reivindicaciones contempladas en la convención colectiva, y el sindicato de JAPDEVA llega a un arreglo el día 18, después de una suspensión de labores. El paro del 24 de abril es muy parcial, y al no sumar más fuerzas, abre una dinámica de retroceso, porque los trabajadores comienzan a atemorizarse ante los despidos y la impotencia que demuestra el movimiento sindical al no enfrentarlos consecuentemente. Los burócratas de la Rerum Novarum se ven, sin embargo, premiados por el gobierno, que en su cincuenta aniversario, la declara institución de «utilidad pública» y abre así la vía para darle financiamiento estatal.

Sin embargo, el repudio que genera la división del movimiento sindical que han provocado, obliga al CIMA a realizar una multitudinaria marcha el 30 de mayo, para darle confianza a los educadores de que las negociaciones caminan. El Magisterio Nacional sale así a las vacaciones de quince días sin conciencia de la maniobra que se prepara en la Asamblea Legislativa, para sepultar su régimen de pensiones.

En efecto, en el entretanto se ha sellado el pacto Calderón-Figueres para cerrar y privatizar instituciones, pasar proyectos de ley como el de garantías económicas del PUSC, vender la Fábrica Nacional de Licores y romper así el monopolio estatal de la fabricación de alcohol, y aprobar a treinta días plazo una nueva ley de pensiones del Magisterio Nacional. Ni lerdos ni perezosos, los

diputados del PUSC y del PLN pasan a golpe de tambor la nueva ley. Confían en presentársela al Magisterio como un hecho consumado y que no haya resistencia.

Sin embargo, la valiente actitud de los educadores de San Ramón y Heredia que se lanzan a una huelga de hambre ante la Asamblea Legislativa y las movilizaciones del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), obligan al CIMA (ahora renombrado Frente de Organizaciones Magisteriales-FOMA) a anunciar la huelga para el primer día de regreso a clases.

El conjunto de la burocracia sindical ve que es la oportunidad de engancharse con los educadores, para presionar al gobierno a una negociación, y es así como la Rerum Novarum, con José Joaquín Meléndez al frente, maniobra para que las centrales y los principales sindicatos dejen de asistir al CPT y se constituya, por un acuerdo de cúpulas, el Comité Cívico (6) que será el que llame a la huelga nacional, con una agenda nacional de concertación, que ni siquiera es discutida ampliamente en las juntas directivas de los sindicatos. En el CPT venían participando los sindicatos grandes y pequeños en pie de igualdad, Meléndez, con el apoyo de Albino Vargas de la ANEP (7), quiso asegurarse el control del conflicto.

III. ¿POR QUE FRACASO LA HUELGA?

El gobierno estuvo claro, en todo momento, de que la burocracia sindical no se le iba a enfrentar consecuentemente y no se iba a lanzar de lleno a promover una huelga nacional. Su estrategia fue quebrar la huelga de los educadores, negándose a negociar con el FOMA, para que la misma se prolongara y se fuera desgranando a consecuencia del rebajo salarial.

El gobierno corría el riesgo de que la combatividad de los educadores y el descontento de grandes sectores de la población, extendieran la huelga y se abriera una situación que lo obligara a echar marcha atrás, en medio de una explosión popular.

Pero se jugó la carta de derrotar a los educadores y por esta vía golpear a todo el movimiento de masas, conciente del papel nefasto que habían venido jugando las burocracias sindicales, al aceptar sin mucha oposición la movilidad laboral y las otras medidas de los PAEs.

Los educadores salieron a pelear dispuestos a todo, porque comprendían que el triunfo de su lucha significaba la derrota del pacto Calderón-Figueroes. El educador tomó conciencia, de que si se imponían los planes de ajuste, sus

derechos y su nivel de vida, como el de todo el pueblo costarricense, iban a sufrir un grave deterioro. Lo que no pudieron entender es que mantener en la conducción de la huelga a la burocracia del FOMA, preparaba el terreno para que la estrategia del gobierno de desgastar la huelga fuera exitosa.

Aunque demagógicamente, para recuperar la confianza de los educadores, el FOMA planteaba que estaba por la derogatoria de la nueva ley, en el fondo de lo que se trataba era de arrancarle algunas concesiones al gobierno (la reforma de la nueva ley de pensiones para que no fuera tan brutal la pérdida de beneficios para los educadores) que le permitieran a los burócratas salvar la cara. Como hemos apuntado más arriba, el interés fundamental de la burocracia al lanzar la huelga, no era defender el régimen de pensiones del Magisterio Nacional, sino recuperar su papel como agente mediador del gobierno para imponerle al movimiento de masas la reforma del Estado. Como en las ocasiones anteriores, la dirigencia del FOMA confiaba en que el gobierno se vería obligado a negociar por la fuerza de la huelga de los educadores. Pretendían asustarlo con la amenaza de la huelga nacional, y chantajearlo políticamente con el anuncio (nunca concretado durante la huelga, para no quemar puentes antes de tiempo) de romper con el PLN y el PUSC.

Por eso con este cálculo de buscar algunas reformas, se limitaron a presionar con continuas marchas, mientras el gobierno endurecía su posición (dejando en claro que no negociaría la más mínima reforma) y golpeaba con el rebajo salarial. Así, después de dos semanas, esta orientación con que la burocracia dirigía la huelga comenzó a desgastar el movimiento.

Prestando oídos sordos al clamor de las bases, la dirigencia no implementó ninguna medida para constituir un fondo de huelga que permitiera auxiliar económicamente a los educadores más necesitados (8). La desesperación comenzó a hacer presa de muchos compañeros, porque se hizo claro al mismo tiempo que la huelga no se extendería a otros sectores de trabajadores amenazados en lo inmediato por las medidas del pacto Calderón-Figueres (Limón, bancarios, ICE, CORTEL), porque los burócratas de cada sector estaban negociando bajo cuerda con el gobierno y posponían una y otra vez la concreción de la huelga.

Aquí conviene decir que por la posibilidad de que la huelga se extendiera, el gobierno y la prensa hicieron un esfuerzo propagandístico por presentarla sólo como una huelga de los educadores, ocultar los paros que hubo en instituciones en la picota (como DINADECO, CONACIT, IDA, Hacienda y otras) y no mencionar

las demandas que levantaba el Comité Cívico en la agenda nacional a negociar, pretendiendo incorporar en la lucha más sectores de la población. El carácter abstracto de las mismas, ciertamente, que no ayudó a involucrarlos, pero lo que hay que tener en cuenta, fundamentalmente, es que el propio Comité Cívico no realizó una campaña de agitación en torno a estas reivindicaciones. Lo que confirma que para estos burócratas, de lo que se trataba era de aprovechar la amenaza de sumarse a los educadores en una huelga nacional para ver qué negociaban sectorialmente con el gobierno. Más aun, es importante tener en cuenta que la Rerum Novarum maniobró para constituir burocráticamente, por arriba, por acuerdo entre las centrales y la ANEP, el Comité Cívico y asegurarse su conducción, y en la práctica ninguno de sus principales sindicatos estuvo en la huelga. (El día en que pararon más sindicatos fue el 7 de agosto para asistir a la marcha y se reintegraron a labores con el pretexto de arrancar la huelga indefinida posteriormente).

Ahora bien, en algunos sectores, el desinterés de las burocracias sindicales en concretar la huelga se combinó con el hecho de que los trabajadores la percibieron como una huelga del Magisterio (los trabajadores tenían fresco en la memoria que el FOMA dividió el paro del 24 de abril y sentían que los quería utilizar) y en otros casos con el clima de temor y escepticismo que sembraron los miles de despidos de la movilidad voluntaria y la complicidad de las burocracias sindicales con estos.

Además, el propio FOMA no hizo mucho esfuerzo para convencer al resto de los trabajadores del sector público de que se trataba de un movimiento nacional y no se iba a negociar por aparte como en el pasado. A los educadores que plantearon volcarse a las instituciones públicas con piquetes para realizar mitines y asambleas para lograr que entraran en paro, no se les dio nunca respuesta. La dinámica era de discursos de los dirigentes en las asambleas, y en el caso de San José, salir a mediodía en marcha. La burocracia trataba así de aparecer movilizandoo, y al mismo tiempo, controlar cualquier proceso de discusión democrático sobre los objetivos de la lucha y las medidas a tomar. Más aun, tampoco hubo ninguna orientación para movilizar a las comunidades, organizando el apoyo de padres de familia y estudiantes.

Era evidente que el gobierno no daba el brazo a torcer, aun después de una marcha tan grandiosa como la del 7 de agosto, y frente a esto el FOMA no tenía ningún plan de lucha sistemático y con objetivos claros (9). Muchos educadores comenzaron así a reintegrarse, aunque no en las proporciones que decía el

gobierno. Ya finalizando, la huelga tenía una fuerza como la del 89, donde el Magisterio estuvo dividido, con la ANDE del lado del gobierno.

En esa ocasión la huelga triunfó, porque radicalizó sus formas de lucha. Ahora no había otra manera de quebrar la intransigencia del gobierno. No se podía confiar en que se sumasen otros sectores de trabajadores, y continuar con las marchas después de una movilización tan gigantesca, como la del 7 de agosto, frente a la cual el gobierno sólo puso oídos sordos, era sembrar un sentimiento de impotencia entre los educadores y hacer que la huelga comenzara a desbandarse.

Una gran parte de los educadores estaba dispuesta a darlo todo en la lucha, y estamos seguros de que se hubiera incorporado masivamente a tomas de edificios públicos, cierre de vías y a cualquier otra medida de fuerza.

La burocracia del FOMA, sin embargo, se limitó a continuar las marchas, porque concientemente se había vuelto derrotista y quería que el movimiento se desgastara rápidamente para poder negociar con el gobierno su capitulación. Cínicamente se prestó al juego del gobierno para desmoralizar a los educadores, entrando en negociaciones secretas con el ministro de Trabajo, Farid Ayales, que la prensa, para regocijo de este, va a destapar. La burocracia temía la reacción de las bases, que en las últimas huelgas habían rechazado los acuerdos más lesivos y obligado a sostener las huelgas y hacer nuevas negociaciones. Quería desmoralizarlas para capitular más fácilmente.

A los educadores más combativos, que veían la necesidad de tomar rápidamente medidas de fuerza, intentó engañarlos pocos días antes de la traición, dejando correr la versión de que el Comité Cívico estaba preparando la toma de la Asamblea Legislativa.

El levantamiento de la huelga se consumó el jueves 17 de agosto, los dirigentes del FOMA y del Comité Cívico firmaron un acuerdo propuesto por el Rector de la Universidad Nacional (UNA) (10), muy similar al que unos días antes las bases habían rechazado abrumadoramente en las asambleas de todo el país, demandando categóricamente la suspensión de la Ley 7531 y exigiendo el pago de los salarios caídos. Se selló así la derrota, porque aunque la inmensa mayoría de los educadores comprendió que del comité de alto nivel entre la burocracia y el gobierno que constituía el acuerdo, no saldría ninguna mejora de la ley por la vía de su reglamento, la traición de la burocracia terminó de sumirlos en la desmoralización.

IV. LAS LECCIONES DE LA HUELGA

La huelga demostró que bajo la conducción de la burocracia sindical los trabajadores van a sufrir derrota tras derrota. La burocracia sindical se ha convertido en un agente cada vez más comprometido con el gobierno y la patronal y como tal realiza un trabajo de zapa en las organizaciones de los trabajadores (11). Pese a la desmoralización que están sufriendo los educadores ante la derrota y lo que ello implica: perder el derecho después de una vida de trabajo a una pensión digna que asegure la vejez, muchos activistas han



comprendido la necesidad de organizarse en otro tipo de organización sindical, verdaderamente de lucha y democrática, donde los dirigentes respeten la voluntad de las bases, y los fondos de los sindicatos no sean una fuente de enriquecimiento y privilegios para los dirigentes. Este proceso está dando surgimiento al Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE 7 de agosto) y por eso somos optimistas de que a mediano plazo los educadores vuelvan a pelear. Estamos seguros de que el educador no va a permanecer mucho tiempo impasible, ante la ofensiva brutal del gobierno y la patronal para hundir en la miseria al pueblo costarricense.

Somos también optimistas. Porque muchos compañeros comprendieron durante la huelga que el PUSC y el PLN, por ser partidos de los empresarios, son enemigos de los trabajadores y los pobres, y por eso los trabajadores tenemos que construir nuestro propio partido, para pelear por el poder e imponer los cambios que se necesitan en nuestro país.

La huelga dejó una enseñanza muy clara también. En este país va a correr sangre para que se respeten los derechos del pueblo. La burguesía se está armando para ello. A la próxima pelea, estamos seguros que el educador saldrá dispuesto a poner barricadas, tomar instituciones y hacer los sacrificios que haya que hacer.

NOTAS

- (1) Durante la administración del presidente Calderón se dictó la llamada Ley de Pensiones de 1992 que pretendía, con algunas excepciones como es el caso del Magisterio Nacional, incluir todos los regímenes jubilatorios en uno solo. Todo ello según las reiteradas instancias, que los organismos financieros internacionales venían haciendo desde mediados de los ochenta.
- (2) Estos programas de ajuste estructural (PAEs) se han aplicado en todo el continente, desde mediados de los años 80 y en su tercera versión implican una violenta reducción del gasto público (significan alcanzar un déficit de apenas el 0,5% del producto interno bruto, en muchos casos), una considerable reducción del gasto social y la venta de las más importantes empresas públicas en cada país.
- (3) La evasión fiscal originada a partir de los certificados de abono tributario (CAT) alcanza ya a varios miles de millones de colones, según el Ministerio de Hacienda, resultando sumamente dudosos los «beneficios» que podrían derivarse de la contribución a la supuesta «sostenibilidad» de algunas empresas. Lo que es indudable es que aquí sí puede hablarse de verdaderos PRIVILEGIOS.
- (4) La aparente inversión de importantes sumas en la compra de bonos de la deuda pública venezolana, con propósitos especulativos no muy claros, por parte de la Gerencia y con el acuerdo de la Junta Directiva, trajo al Banco Anglo Costarricense (el más antiguo del país, fundado en 1863), pérdidas superiores a los ocho mil millones de colones y el posterior cierre de la institución, acción que ha provocado muchas dudas, sobre todo, teniendo en cuenta que las pérdidas se han multiplicado hasta alcanzar los ochenta mil millones de colones.
- (5) El Consejo Intermagisterial Asociado (CIMA) es uno de los muchos nombres que ha adoptado el organismo coordinador de las acciones de las principales organizaciones magisteriales existente hasta ahora como son: la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), cuyo origen data del año 1941, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), originada en 1955 y el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), nacido en 1969.
- (6) El Comité Cívico, teóricamente formado por todas las organizaciones sindicales del país, fue el encargado de conducir la hipotética huelga nacional, a la que nunca se llegó. Este sustituyó, así, en los hechos al Frente de Organizaciones Magisteriales (FOMA) en la conducción del conflicto, a pesar de ser este último la representación de quienes en realidad fueron a la huelga y llevaron el peso de la lucha.
- (7) La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), la más importante y antigua organización de los empleados públicos de Costa Rica. Su origen data de (1961) y aunque su afiliación supera los diez mil afiliados, muchos ponen en duda su capacidad de lucha y su influencia para movilizar a las bases.
- (8) Los fondos de las instituciones financieras de los educadores, como la Caja de la Asociación Nacional de Educadores-ANDE, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional y las cooperativas, no se pusieron al servicio de la huelga, porque son como capital privado de los jefes que las dirigen, como se ha visto ahora con la persecución a los trabajadores

de estas instituciones para quitarles derechos laborales y algunos proyectos, a espaldas de los educadores, para introducir las al mercado financiero con la participación de capital privado.

- (9) El 7 de agosto tiene mucha significación política, porque los educadores y los trabajadores que se movilizaron ese día tenían la ilusión de que volcándose a las calles, iba a ser patente la voluntad democrática de gran parte del pueblo costarricense de que el Presidente negociara y se derogara la nueva ley de pensiones del Magisterio Nacional. La provocación que montó la policía al finalizar la marcha, puso en evidencia el cambio que ha sufrido el régimen político en Costa Rica. Figueres dio muestras una vez más de estar dispuesto a imponer por la fuerza las medidas de los planes de ajuste. Como apuntamos en la charla, frente a la necesidad de arrebatar conquistas históricas al movimiento de masas y reestructurar el marco jurídico e institucional del Estado para adecuarlo al proceso de globalización, el régimen democrático-burgués tradicional ha venido dando paso a un tipo de gestión más autoritaria del poder con eje en la institución presidencial.
- (10) Aunque la dirección del SINDEU, encabezada por el compañero Héctor Monestel, tiene el inmenso mérito de no haber firmado el acuerdo para levantar la huelga y haber denunciado todas las maniobras para negociar a espaldas de los educadores, en abril, aunque se sumó al paro del 24, el que aceptara la negociación en treinta días plazo, sin denunciar que se trataba de una maniobra del gobierno para sacar al CIMA del paro, fue un grave error de su parte. Durante la huelga, su incorporación al Comité Cívico hizo que el SINDEU se limitara a seguir las acciones establecidas por el Comité Cívico y no jugara ningún papel independiente, organizando y movilizándolo a los educadores de base que veían la necesidad de ir más allá de las marchas rutinarias de la burocracia.
- (11) El papel nefasto de las burocracias del FOMA se está poniendo de nuevo de relieve, en la traición que están cometiendo, contra el pueblo de Costa Rica, al aceptar la implementación de la llamada «propuesta educativa EDU 2005», que implica someter el sistema educativo del país al juego de los sectores dominantes y sus políticas de hambre y exclusión para las grandes mayorías nacionales, dentro de las reglas del juego de la globalización.